



# Asamblea General

Distr. general  
19 de julio de 2021  
Español  
Original: inglés

## Septuagésimo sexto período de sesiones

Tema 75 a) del programa provisional\*

**Promoción y protección de los derechos humanos:  
aplicación de los instrumentos de derechos humanos**

### **Situación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo: participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en los procesos de adopción de decisiones**

#### **Informe del Secretario General**

##### *Resumen*

Este informe, presentado de conformidad con la resolución [74/144](#) de la Asamblea General, ofrece un panorama de la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en los procesos de adopción de decisiones. Presenta las iniciativas que se están llevando a cabo y los progresos realizados por los Gobiernos, las entidades del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil para aumentar la participación significativa, en particular en el contexto de la crisis sin precedentes de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), que ha exacerbado las desigualdades y aumentado las barreras a la participación de las personas con discapacidad, así como los progresos realizados al respecto. En el informe también se incluye información actualizada sobre la situación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. El informe concluye con una serie de recomendaciones para fomentar la participación plena y significativa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en los procesos de adopción de decisiones para la aplicación de la Convención y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

\* [A/76/150](#).



## I. Introducción

1. En el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad<sup>1</sup>, se insta a los Estados partes a “asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás” y “promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos”. Guiándose por la Convención, así como por otros instrumentos de derechos humanos y de desarrollo que se centran en la participación de las personas con discapacidad, las Naciones Unidas trabajan tanto para aumentar la capacidad de actuar de las personas con discapacidad como para eliminar las barreras que impiden su inclusión en el entorno físico y social.

2. La crisis sin precedentes de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha obstaculizado o bloqueado en muchos sentidos la participación y la capacidad de actuar de las personas con discapacidad en muchos aspectos de la sociedad y el desarrollo. La crisis ha puesto de manifiesto el alcance de la marginación y las desigualdades a las que se enfrentan las personas con discapacidad. También ha aumentado las barreras existentes para acceder a las necesidades básicas y ha levantado otras nuevas. No obstante, el actual proceso de recuperación presenta oportunidades para establecer nuevas normas y reglas, forjar asociaciones y fortalecer las instituciones con el fin de crear salvaguardias contra el impacto devastador de esta crisis y de futuras situaciones de este tipo.

3. Hay muchos ejemplos inspiradores de medidas y procesos de respuesta y recuperación relacionados con la COVID-19 por parte de miembros de la comunidad internacional, incluidos los Estados Miembros, las entidades del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones del sector privado y la sociedad civil, creados en colaboración con personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para integrar los derechos, las perspectivas y el bienestar de las personas con discapacidad en el proceso de recuperación, permitir su participación y liderazgo como agentes de cambio y tener en cuenta sus experiencias vividas. Esta siguiente fase de la recuperación de la pandemia de COVID-19 ofrece una oportunidad para que la comunidad internacional pueda reconstruir para mejorar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la aplicación plena y efectiva de la Convención, para y con las personas con discapacidad.

4. De conformidad con lo solicitado por la Asamblea General en su resolución 74/144, el presente informe aborda la situación de la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en los procesos de adopción de decisiones. El informe permite conocer mejor los esfuerzos pertinentes e incluye la información que figura en los informes presentados por los Estados partes conforme al artículo 35 de la Convención, así como las aportaciones adicionales de los Estados Miembros, las entidades de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil. Concluye con recomendaciones para seguir fomentando la

<sup>1</sup> Al 15 de julio de 2021, 182 Estados eran parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 164 la habían firmado desde su apertura a la firma el 30 de marzo de 2007. La Unión Europea, como organización regional, también ha ratificado la Convención. Además, el Protocolo Facultativo de la Convención contaba con 99 Estados partes y 94 signatarios. La lista de todos los signatarios, ratificaciones y adhesiones de la Convención se puede consultar en: [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtmsg\\_no=IV-15&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtmsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en). La lista de todos los signatarios, ratificaciones y adhesiones del Protocolo Facultativo se puede consultar en: [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtmsg\\_no=IV-15-a&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtmsg_no=IV-15-a&chapter=4&clang=_en).

participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en los procesos de adopción de decisiones de conformidad con la Convención y para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

## **Marco normativo internacional sobre la participación de las personas con discapacidad**

5. La participación en la adopción de decisiones en el presente informe se refiere a quienes participan, como individuos o como parte de una organización más amplia, en las decisiones que afectan a sus propias vidas y comunidades. Incluye el derecho a votar, a ser elegido, a tener acceso a cargos públicos y a participar en asuntos públicos. Ser parte de los asuntos públicos comprende todos los aspectos de la administración pública y la elaboración de políticas (véase [A/HRC/31/62](#)).

6. La participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en los procesos de adopción de decisiones garantiza que los procesos respondan mejor a las necesidades y perspectivas de las personas con discapacidad. Esta participación puede generar eficiencia e innovación y dar lugar a mejores políticas y servicios. También conduce a un cambio social transformador, en el sentido de que las personas con discapacidad tienen una mayor capacidad de actuar y sus voces se amplifican.

7. Para lograr una participación plena, efectiva y significativa de las personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones, estos deben ser inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad, en todos los grupos de población, incluidas las mujeres y las niñas con discapacidad. Las personas con discapacidad deben tener acceso a las habilidades, fondos y recursos necesarios para participar, sin la injerencia de otros agentes.

8. La participación efectiva y significativa de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, como agentes de cambio, es el elemento central de la Convención. Además, el proceso de elaboración de la Convención fue un ejemplo primordial de esa participación en la adopción de decisiones, ya que las personas con discapacidad participaron activamente y actuaron como líderes en la redacción de la propia Convención.

9. Como se reconoce en el preámbulo de la Convención, las personas con discapacidad deben participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente. Además, en virtud del artículo 4, párrafo 3, de la Convención (obligaciones generales) los Estados Partes deben celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para aplicar la Convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad. El artículo 29 de la Convención establece que las personas con discapacidad tienen derecho a participar activamente en la vida política y pública.

10. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su observación general núm. 7 (2018), enumeró una serie de puntos necesarios para aplicar el artículo 4, párrafo 3, de la Convención (véase [CRPD/C/GC/7](#)). Los Estados Partes deberían “celebrar consultas estrechas e integrar activamente a las personas con discapacidad, a través de sus propias organizaciones, en los marcos jurídicos y reglamentarios y los procedimientos en todos los niveles y sectores del Gobierno. Los Estados partes deberían considerar las consultas y la integración de las personas con

discapacidad como medida obligatoria antes de aprobar leyes, reglamentos y políticas, ya sean de carácter general o relativos a la discapacidad”. Estas consultas “deberían comenzar en las fases iniciales y contribuir al resultado final en todos los procesos de adopción de decisiones”. Además, las consultas “deberían comprender a las organizaciones que representan a la amplia diversidad de personas con discapacidad a nivel local, nacional, regional e internacional”. Asimismo, para que la participación sea significativa, los Estados partes deberían garantizar que los espacios de adopción de decisiones del sector público sean accesibles para las personas con discapacidad.

11. Las disposiciones de la Convención se basan en acuerdos internacionales anteriores. El principio de participación en la vida pública se establece claramente en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La participación, como principio y derecho humano, se reconoce también en otros instrumentos de derechos humanos, por ejemplo en el artículo 5 c) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y los artículos 12 y 23, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño.

12. La Agenda 2030 reconoce la importancia de que la adopción de decisiones sea inclusiva para todos, incluidas las personas con discapacidad, y en la meta 16.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se hace un llamamiento a garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

## **II. Panorama de la situación de la participación de las personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones**

### **A. Participación en la adopción de decisiones a nivel nacional<sup>2</sup>**

13. La participación de las personas con discapacidad en el seguimiento de la aplicación de la Convención es necesaria en virtud del artículo 33, párrafo 3, de la Convención. Sin embargo, la participación activa de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en la elaboración de políticas de aplicación nacional ha sido insuficiente. Los progresos realizados por los Estados partes en la última década incluyen la concesión de ayuda financiera o de otro tipo a las organizaciones de personas con discapacidad, así como la inclusión de esas personas en los marcos independientes de seguimiento y en los procesos nacionales de seguimiento. Además, algunos Estados han mantenido consultas con organizaciones de personas con discapacidad para la preparación de sus informes iniciales y periódicos al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, este progreso en la participación en el seguimiento rara vez ha ido

<sup>2</sup> Los datos presentados en esta sección proceden principalmente de las siguientes fuentes: *Building Disability-inclusive Societies in Asia and the Pacific: Assessing Progress of the Incheon Strategy* (publicación de las Naciones Unidas, 2018) (datos de Asia y el Pacífico); “Uganda’s reserved elected seats for persons with disabilities”, Zero Project, disponible en <https://zeroproject.org/policy/uganda-2> (datos de Uganda); Análisis del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales sobre la base de información del sitio web Election Access, gestionado por la International Foundation for Electoral Systems, disponible en [www.electionaccess.org/en/resources/countries](http://www.electionaccess.org/en/resources/countries), y Estados Unidos de América, Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, “Voters with disabilities: observations on polling place accessibility and related federal guidance” (octubre de 2017), pág. 15, disponible en [www.gao.gov/assets/gao-18-4.pdf](http://www.gao.gov/assets/gao-18-4.pdf) (datos sobre discapacidad).

acompañado de una participación significativa en la elaboración de políticas y la adopción de decisiones a nivel nacional o local, incluso en el desarrollo y la aplicación de políticas y programas.

14. Solo existen datos sobre la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en los procesos de adopción de decisiones en unos pocos países y en procesos limitados. La participación de las personas con discapacidad en los órganos electivos, como los gobiernos nacionales y locales, en los órganos principalmente designados, como en el nivel ejecutivo o ministerial o en la judicatura y la administración pública, y en los puestos de liderazgo en los sectores público y privado, así como en la sociedad civil, no se recopila con regularidad a nivel mundial. Además, la mayoría de los Estados tampoco recopilan ni comunican datos desglosados por discapacidad sobre la inscripción de votantes y las tasas de participación en las elecciones. Los limitados datos disponibles no han sido sistematizados ni agregados a lo largo del tiempo ni entre las distintas regiones. Aunque la meta 16.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relativa a la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades, incluye dos indicadores que deben desglosarse por discapacidad, no se dispone de datos para hacer un seguimiento de los avances en el logro de esta meta.

15. Es necesario tomar más medidas para recopilar datos desglosados por discapacidad sobre la participación en la adopción de decisiones. Una mayor colaboración entre las comisiones regionales y con otras instituciones pertinentes podría facilitar la disponibilidad de datos regionales y globales sobre la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en los procesos de adopción de decisiones. La presentación de informes y la recopilación de manera sistemática y periódica de estos datos a nivel nacional, regional y mundial sería un buen avance para establecer una base de referencia global para medir los progresos y reforzar la base de conocimientos para diseñar respuestas de políticas o programas adecuadas.

16. En los casos en que se dispone de datos, el nivel de representación de las personas con discapacidad en los órganos de decisión, como los órganos legislativos nacionales, sigue siendo bajo. En más del 50 % de los 21 países evaluados en la región de Asia y el Pacífico en 2016 y 2017 no había parlamentarios con discapacidad en los parlamentos nacionales y, en el resto, los parlamentarios con discapacidad representaban, en promedio, solo el 2 % de todos los parlamentarios. Uganda es un ejemplo positivo de la inclusión política de las personas con discapacidad, donde hay unos 47.000 representantes con discapacidad en los órganos de elección directa. La participación política de las personas con discapacidad se ha visto facilitada por la aprobación y aplicación de requisitos de accesibilidad en los edificios del sector público, así como por las cuotas federales, de distrito y locales, muchas de ellas también equilibradas en cuanto al género, para garantizar que un número o porcentaje mínimo de escaños de los órganos políticos elegidos a todos los niveles se reserve a representantes con discapacidad.

17. Una amplia participación en la política, como votar y ser elegidos para ocupar cargos, es también clave para la adopción de decisiones inclusiva. Sin embargo, incluso cuando los derechos políticos de las personas con discapacidad están legalmente garantizados, los Estados a menudo limitan o impiden la participación en estos procesos por motivos de discapacidad, directa o indirectamente. Las leyes electorales o de voto restrictivas son un motivo de preocupación para las personas con discapacidad en todo el mundo, en particular por su frecuente aplicación a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, que a menudo se ven privadas del derecho a votar y a ser elegidas para un cargo. Además, los entornos

institucionales suelen excluir a las personas con discapacidad por falta de accesibilidad, prejuicios institucionales o discriminación.

18. Un total de 128 países de los 190 sobre los que se ha facilitado información en línea, tienen excepciones en su constitución, legislación o leyes que podrían restringir el derecho de voto de las personas con discapacidad, y 94 de ellos tienen exclusiones dirigidas a personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Los datos disponibles indican que solo 62 países conceden a todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad, el derecho de voto sin excepciones. En cuanto al derecho de las personas con discapacidad a ser elegidas para un cargo, 161 de los 176 países evaluados tienen excepciones a ese respecto. De estos 161 países, 104 tienen exclusiones dirigidas a las personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Solo 15 de los 176 países conceden a todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad, el derecho a ser elegidos para un cargo sin excepciones.

19. Las personas con discapacidad tienen un índice de participación en el voto más bajo, incluso en los países que cuentan con una ley integral sobre la discapacidad. Los datos existentes en los países en desarrollo indican que las personas con discapacidad tienen casi el doble de probabilidades de no haber votado en las últimas elecciones y cuatro veces más probabilidades de haber tenido problemas para votar en esas elecciones. La inaccesibilidad de las mesas de votación ha sido un obstáculo para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho de voto. Menos del 50 % de las mesas de votación de 7 de 13 capitales de la región de Asia y el Pacífico eran accesibles. En 2016, solo el 17 % de las mesas de votación en Estados Unidos de América fueron completamente accesibles. Entre los obstáculos más comunes señalados por las personas con discapacidad para emitir su voto se encuentran las dificultades para leer la papeleta, esperar en la cola, encontrar y entrar en el colegio electoral, escribir en la papeleta y comunicarse con los funcionarios electorales.

20. Muchas personas con discapacidad se enfrentan a numerosos obstáculos para acceder a puestos decisorios de alto nivel, debido sobre todo a actitudes negativas. En 16 de los 19 países de los que se dispone de datos más recientes, correspondientes a 2010, las personas con discapacidad tenían menos probabilidades que las personas sin discapacidad de ocupar un puesto de legislador, alto funcionario o directivo. En algunos países, el porcentaje de personas con discapacidad empleadas de 15 años o más que trabajan como legisladores, altos funcionarios y directivos era un 50 % inferior al de sus compañeros sin discapacidad.

21. Las barreras son aún mayores para las mujeres con discapacidad. Los datos de esos 19 países mostraron que, en promedio, las mujeres con discapacidad tenían menos probabilidades de ocupar puestos de legisladora, alta funcionaria o directiva que los hombres con discapacidad: las mujeres con discapacidad tenían menos probabilidades de ocupar esos puestos en 9 de los 16 países. La brecha de género tiende a ser mayor en los países desarrollados, donde el porcentaje de mujeres discapacitadas empleadas de 15 años o más que trabajan como legisladoras, altas funcionarias y directivas puede ser un 50 % inferior al de sus colegas varones.

22. Aunque hay pocos datos sobre las mujeres con discapacidad en puestos de liderazgo político, los datos disponibles sugieren que la representación sigue siendo extremadamente baja. Según los datos recogidos en 2017, en 14 de 18 países de la región de Asia y el Pacífico no había mujeres parlamentarias con discapacidad en el órgano legislativo nacional. En los otros cuatro países, el porcentaje de mujeres parlamentarias con discapacidad oscilaba entre el 0,3 % y el 6,3 %. La representación de las personas con discapacidad en los mecanismos nacionales para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como en los mecanismos destinados a mejorar la participación política de las mujeres, es comparativamente baja, con una media regional del 2,7 %.

23. La representación de las organizaciones de personas con discapacidad también tiende a ser baja en los mecanismos nacionales de coordinación sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad. Por ejemplo, entre 17 países o zonas de la región de Asia y el Pacífico encuestados con datos disponibles más recientes, correspondientes a 2017, el porcentaje de miembros de organizaciones de personas con discapacidad en los mecanismos nacionales de coordinación sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad solo era, en promedio, del 33 %. En dos de esos países no había miembros de organizaciones de personas con discapacidad en los mecanismos nacionales de coordinación sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad, y solo en cuatro países esos mecanismos tenían un 50 % o más de miembros de organizaciones de personas con discapacidad. La representación de las mujeres de las organizaciones de personas con discapacidad en esos mecanismos tiende a ser aún menor. El porcentaje de mujeres en las organizaciones de personas con discapacidad fue, en promedio, del 12 %, frente al 21 % en el caso de los hombres. En tres de esos países no había ninguna representante de personas con discapacidad. El número de mujeres entre los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad era igual o superior al de los hombres únicamente en cinco países o zonas.

24. La representación de las mujeres con discapacidad en los mecanismos nacionales para la igualdad de género también ha sido escasa en varios casos. Por ejemplo, en 7 de los 12 países de la región de Asia y el Pacífico con datos disponibles más recientes, correspondientes a 2017, ninguno de los miembros de esos mecanismos eran mujeres con discapacidad. En los cinco países restantes, el 9 % de los representantes, en promedio, eran mujeres con discapacidad.

25. Las mujeres con discapacidad también se enfrentan a barreras que les impiden ascender a la dirección de las organizaciones de personas con discapacidad. Un análisis de los datos de los medios sociales realizado en 2017 indicó que el 42 % de las mujeres, frente al 58 % de los hombres, ocupaban puestos de liderazgo en organizaciones de habla hispana que trabajan en cuestiones relativas a la discapacidad o con personas con discapacidad.

26. En cuanto a la participación en los procesos de adopción de decisiones pertinentes para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en los exámenes nacionales voluntarios de la implementación de la Agenda 2030 ha presentado, hasta la fecha, un panorama desigual<sup>3</sup>. En algunos países se invita a las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan a las reuniones consultivas y a presentar un documento de posición, mientras que en otros se las deja fuera de esas reuniones. Sobre la base de la información recopilada de las organizaciones de personas con discapacidad de 13 países, en 2017 la participación formal, con mecanismos claramente establecidos, de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en las consultas nacionales para elaborar el examen nacional voluntario fue poco frecuente. Las consultas oficiosas fueron más habituales.

<sup>3</sup> Véase Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, “2020 synthesis report of the voluntary national reviews”; Grupo de Partes Interesadas de las Personas con Discapacidad y Alianza Internacional de la Discapacidad, “Case study on the engagement of organizations of persons with disabilities (DPO) in voluntary national reviews” (2017).

## **B. Participación en la adopción de decisiones a nivel mundial**

27. El nivel de participación de las personas con discapacidad varía en los procesos internacionales. El nivel más alto de participación en un proceso mundial se dio quizás en la redacción de la Convención. Los representantes de organizaciones de personas con discapacidad constituyeron el 30 % del grupo de trabajo encargado de elaborar el proyecto de texto de la Convención. Esto permitió a las personas con discapacidad participar de forma significativa y desempeñar un papel clave en el desarrollo y la redacción de la Convención. Esta estrecha consulta y la colaboración activa con las personas con discapacidad, por conducto de organizaciones de personas con discapacidad y sus asociados, influyeron positivamente en el proceso de redacción de la Convención y su resultado, así como en su pertinencia para las personas con discapacidad.

28. Otro buen ejemplo es el Grupo de Partes Interesadas de las Personas con Discapacidad para el Desarrollo Sostenible, que forma parte del mecanismo de coordinación con los grupos principales y otros interesados en el contexto del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, creado tras el compromiso mundial de que las personas con discapacidad participen de forma significativa en los procesos mundiales relacionados con el desarrollo sostenible. Los representantes del Grupo de Partes Interesadas han sido invitados, entre otros, como observadores a las reuniones del foro y a las consultas sobre la declaración ministerial del foro y otros procesos intergubernamentales relacionados, con el fin de reflejar las necesidades y perspectivas de las personas con discapacidad. Esto ha permitido que las personas con discapacidad participen en la implementación general de la Agenda 2030 y en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, recientemente, en la respuesta y recuperación ante la COVID-19.

29. Al igual que todos los grupos principales y otros interesados, el Grupo de Partes Interesadas de las Personas con Discapacidad tiene derecho, de conformidad con la resolución 67/290 de la Asamblea General, a asistir a todas las reuniones oficiales del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, tener acceso a toda la información y documentos oficiales, intervenir en las reuniones oficiales, presentar documentos y aportaciones escritas y orales, formular recomendaciones y organizar actos paralelos y mesas redondas, en cooperación con los Estados Miembros y la Secretaría. Sin embargo, como ocurre con todos los grupos principales, son los Estados Miembros los que deciden en última instancia las modalidades de participación del grupo. En términos generales, el Grupo de Partes Interesadas sigue demostrando un alto nivel de participación en los procesos intergubernamentales en las Naciones Unidas.

30. Las organizaciones de personas con discapacidad también han tenido una repercusión sustancial en la Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se celebra anualmente. Las organizaciones de personas con discapacidad participan en la discusión interactiva del debate general y de la mesa redonda, y organizan o coorganizan muchos de los eventos paralelos de la Conferencia. Además, cada mesa redonda está copresidida por un líder de la sociedad civil y cada acto del programa oficial cuenta al menos con un miembro de la sociedad civil en los paneles de expertos. Asimismo, el foro de la sociedad civil de la Conferencia ofrece una plataforma dedicada a las perspectivas de la sociedad civil y al intercambio de conocimientos.

31. Demostrando un mayor compromiso político al más alto nivel para hacer que los procesos mundiales sean accesibles a las personas con discapacidad, la Asamblea General aprobó en 2020 la resolución 74/253, en la que pedía mejorar la accesibilidad de las conferencias y reuniones. La falta de apoyo financiero a la accesibilidad sigue

siendo un obstáculo para muchas conferencias y reuniones de las Naciones Unidas. Aunque en general los subtítulos están disponibles en las reuniones de las Naciones Unidas en la Sede, la interpretación en lengua de señas, por ejemplo, depende a veces de si existen fondos para cubrir los costos asociados.

32. Además de los ejemplos positivos de la redacción de la Convención, el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible y la Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, otros procesos mundiales, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, han contado también con la participación activa y significativa de las personas con discapacidad.

33. Una importante encuesta, realizada a nivel mundial por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en 2013, mostró que las personas con discapacidad solían quedar excluidas y no se les consultaba sobre la planificación de las respuestas a las amenazas de desastres. Por ello, la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres colaboró activamente con las personas con discapacidad y les ofreció una amplia gama de dispositivos de accesibilidad. El documento final de la Conferencia fue el histórico Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, en el que se exige que se consulte a las personas con discapacidad en los planes y estrategias de gestión del riesgo de desastres.

34. Existen otros ejemplos de participación significativa en los procesos de adopción de decisiones a nivel mundial en los que basarse. La Red de Reducción del Riesgo de Desastres Inclusiva de la Discapacidad que surgió durante la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres es un modelo, y hay otros ejemplos, como el de la gobernanza de Internet, que engloba la Coalición Dinámica sobre Accesibilidad y Discapacidad. Algunos de los participantes más activos de la comunidad de defensores de las personas con discapacidad intervinieron por primera vez en las negociaciones internacionales y las cuestiones de gobernanza global en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

35. En general, la participación activa de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en los procesos mundiales ha sido posible no solo gracias a la creación de mecanismos formales de participación, como los mecanismos *ad hoc* para la Convención y los grupos principales de interesados para el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, sino también gracias al compromiso de apoyo financiero para la participación de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en su resolución [67/290](#), la Asamblea General solicitó la creación de un fondo fiduciario que pudiera cubrir los gastos de participación de las personas con discapacidad en el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible. En otros procesos internacionales de adopción de decisiones, la falta de apoyo financiero y de estructuras formales de colaboración sigue limitando la participación de las personas con discapacidad.

36. Además, la falta de documentación accesible es una barrera importante para la plena participación de las personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones a nivel nacional y mundial. La accesibilidad a los sitios web es igualmente importante, así como la accesibilidad de los procesos y conferencias virtuales, en particular porque muchos procesos nacionales y mundiales se realizan ahora en línea debido a la pandemia de COVID-19.

### III. Iniciativas y progresos en la participación de las personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones<sup>4</sup>

#### A. Estados Miembros

##### 1. Alianzas para la formulación de políticas y la creación de redes consultivas de interesados

37. La aplicación plena y eficaz de la Convención exige que las medidas vengan informadas por las diversas experiencias vividas de las personas con discapacidad. Muchos países han formado alianzas entre los Gobiernos y las organizaciones de las personas con discapacidad. Estas han demostrado ser eficaces tanto como iniciativas concretas y a corto plazo como como iniciativas iterativas y a largo plazo. Por ejemplo, en 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia reunió a 70 dirigentes de organizaciones de personas con discapacidad de sus siete categorías de discapacidad para que prepararan juntos estrategias para alentar la contratación de personas con discapacidad<sup>5</sup>. Desde 2016, Mongolia ha adoptado medidas informadas mediante consultas continuas con la sociedad civil. Entre ellas cabe citar un programa nacional de inclusión de la discapacidad (2017-2021) y un proyecto para mejorar la inclusividad y la calidad de vida de las personas con discapacidad (2018-2022). Estas vinieron acompañadas de la creación de un consejo nacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y de subcomisiones ministeriales sobre los derechos de las personas con discapacidad (2016-2017), así como de un departamento general para el desarrollo inclusivo de la discapacidad (2018). Además, Mongolia ha implicado activamente a las organizaciones de personas con discapacidad en la formulación de su examen nacional voluntario<sup>6</sup>. Entre otros países que han emprendido procesos similares cabe mencionar Kiribati, Nueva Zelanda y Singapur.

38. A fin de incorporar la perspectiva de la discapacidad en la actividad general de las instituciones nacionales y locales, muchos Gobiernos han integrado foros y redes de organizaciones de personas con discapacidad en los mecanismos de formulación de políticas. Por ejemplo, en 2018, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte formó una red regional de interesados integrada por organizaciones de foros de personas con discapacidad en nueve regiones a fin de fomentar la participación de los interesados y solicitar su opinión y de incluir a las personas con discapacidad en las instituciones locales y nacionales. Las reuniones de estas redes se mantuvieron durante la pandemia de COVID-19, gracias al uso de la tecnología de la información y las comunicaciones para la cooperación virtual accesible. La Asociación Nacional para Personas con Discapacidad de Kiribati, financiada a nivel federal, preparó su plan estratégico para el período 2016-2020 a fin de que este informara después la

<sup>4</sup> Los datos presentados en la sección siguiente proceden fundamentalmente de los sitios web de los Gobiernos nacionales, los informes de los Estados partes al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2016-2020), las contribuciones de los Estados partes al debate general sobre la Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2019-2021) y los exámenes nacionales voluntarios para el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible (2018-2020).

<sup>5</sup> Información recibida de Colombia por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad acerca del seguimiento de las observaciones finales del Comité sobre el informe inicial del país. La Ley núm. 1145 (2007) y la sentencia núm. C-935 (2013) establecieron siete categorías de discapacidad a fin de velar por que la diversidad de los interesados se tuviera en cuenta en las actividades de inclusión de las personas con discapacidad: deficiencia física, deficiencia visual, deficiencia auditiva, deficiencia mental, deficiencia intelectual, sordoceguera y discapacidades múltiples.

<sup>6</sup> Véase Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, "A national SDGs process and the involvement of the disabled community in Mongolia" (2019).

legislación social, económica y financiera. La asociación también ha estado celebrando consultas sobre la elaboración de legislación para proteger y promover la participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública, un proceso que está previsto que finalice en 2021. Varios otros países, como Egipto y Namibia, han creado mecanismos específicos de consulta con las organizaciones de personas con discapacidad.

39. No obstante, sigue siendo prevalente la ausencia de consultas con las personas con discapacidad en la aplicación de la Convención. Ello se debe en gran medida a que las consultas no están incorporadas como un mecanismo integrado en la elaboración y la aplicación de políticas y programas que afectan a las personas con discapacidad.

## **2. Mecanismos independientes para el seguimiento de los progresos**

40. En virtud del artículo 33 de la Convención, debe establecerse un mecanismo independiente que incluya a personas con discapacidad para hacer el seguimiento de los progresos de los Gobiernos en la aplicación de la Convención. Algunos Estados han designado su institución nacional de derechos humanos como mecanismo independiente. Este es, por ejemplo, el caso de la Comisión de Derechos Humanos de Australia. Otros han establecido un mecanismo que incluye su institución nacional de derechos humanos, junto a otras organizaciones. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda, la Oficina del Ombudsman y el Grupo de Seguimiento de la Coalición de la Convención forman un mecanismo conjunto. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda colabora con la Autoridad Nacional para la Discapacidad e incluye un comité asesor sobre la discapacidad integrado por un grupo diverso de personas con una experiencia vivida de la discapacidad. Otros Estados han creado instituciones nuevas que constituyan este mecanismo independiente. En este sentido, cabe citar como ejemplos el órgano nacional de vigilancia de Alemania y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de Egipto, un órgano independiente creado en 2019. Un estudio realizado en 2011 por la Comisión Canadiense de Derechos Humanos observó que, de los 27 Estados que presentaban informes al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 44 % había designado a su institución nacional de derechos humanos como mecanismo independiente, el 12 % había designado otro órgano y el 44 % todavía no había designado un mecanismo<sup>7</sup>.

## **3. Reducción de las barreras a la participación de las personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones**

41. La participación es necesaria para la evaluación de las políticas, la recopilación de datos y para asegurarse de que los servicios llegan a las personas a las que están destinados. Sin embargo, asegurar la participación de las personas con discapacidad es con frecuencia difícil debido a barreras sociales, económicas y tecnológicas. Numerosas barreras impiden la participación política de las personas con discapacidad, entre ellas, la pobreza, el desempleo y el subempleo, la disparidad de la educación, la persistencia de la brecha digital y las restricciones de voto. Estas barreras son aún mayores para las personas con discapacidades psicosociales y para aquellas que se enfrentan a múltiples formas interseccionales de discriminación, como las mujeres, las minorías étnicas y religiosas, y las personas indígenas. Las personas con discapacidad representan una elevada proporción de los hogares de bajos ingresos y se enfrentan a un mayor desempleo en todo el mundo, en comparación con las personas sin discapacidad.

<sup>7</sup> Véase Comisión Canadiense de Derechos Humanos, “Survey of national human rights institutions on article 33.2 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities” (2011).

42. Muchos países están haciendo avances en la mejora de la condición socioeconómica de las personas con discapacidad, la ampliación del acceso a la educación y la tecnología de la información y las comunicaciones y haciendo posible el voto para todos. Si bien el 80 % de los Estados Miembros están adoptando medidas para ampliar la educación, los alumnos con discapacidad siguen sin tener acceso a la educación por multitud de factores, como la discriminación y la inaccesibilidad de las instalaciones y los programas. Además, el 80 % de los Estados Miembros todavía tienen restricciones en su legislación, sus políticas y restricciones de otro tipo que impiden votar a las personas con discapacidad.

43. Muchas personas con discapacidad no tienen acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, lo cual impide su educación y su participación en otros ámbitos de la vida. En 2016, solo el 35 % de los hogares de los países en desarrollo tenía un ordenador y solo el 41 % tenía acceso a Internet<sup>8</sup>. El 80 % de las personas con discapacidad vivían en países en desarrollo, el 20 % de las personas más pobres del mundo tenían una discapacidad y, dentro de las comunidades pobres, las personas con discapacidad estaban más desfavorecidas que las personas sin discapacidad<sup>9</sup>. Si bien existen claras correlaciones entre la discapacidad, la pobreza y la falta de acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones informa de que no hay fuentes de datos sistemáticos disponibles para todo el mundo sobre la accesibilidad digital<sup>10</sup>.

44. A fin de superar las dificultades planteadas por la pandemia de COVID-19, el Perú creó “Aprendo en casa”, un servicio de educación a distancia que se ofrece en formatos accesibles a alumnos con distintas discapacidades. El servicio tiene en cuenta las disparidades en el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones utilizando la radio y la televisión, además de Internet, y distribuyendo tabletas. Austria, Chile, Croacia, Ghana, la India, el Líbano, Nueva Zelandia, Qatar, Singapur, Sudáfrica y Trinidad y Tabago ofrecen también buenos ejemplos de expansión de la educación accesible. El programa de tecnología accesible (2017-2022) del Canadá está aumentando la variedad y la asequibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones disponibles para las personas con discapacidad por medio de proyectos cofinanciados con empresas del sector privado, organizaciones sin fines de lucro e institutos de investigación. Chile, el Ecuador, Guatemala, Honduras, Nueva Zelandia y Qatar también han hecho grandes avances a la hora de tener en cuenta, o cerrar, la brecha digital.

45. En 2018, Francia amplió el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, y Singapur ha hecho más accesible el voto utilizando numerosas medidas, entre otras, proporcionar plantillas para las personas con discapacidad visual, a fin de que puedan marcar las papeletas sin asistencia, y proporcionar cabinas

<sup>8</sup> Véase Unión Internacional de Telecomunicaciones, “ICT facts and figures” (2016).

<sup>9</sup> Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, “Factsheet on persons with disabilities”, disponible en [www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities.html](http://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities.html).

<sup>10</sup> Véase Unión Internacional de Telecomunicaciones, *Output Report on ITU-D Question 7/1: Access to Telecommunication/ICT Services by Persons with Disabilities and Other Persons with Specific Needs – Study Period 2018-2021* (2021). Esta situación se está intentando solucionar con el índice de evaluación de los derechos de accesibilidad digital, de la Iniciativa Global para las Tecnologías de la Información y la Comunicación Inclusivas, en colaboración con organizaciones de personas con discapacidad. El índice está recopilando datos procedentes de los defensores de la accesibilidad sobre la accesibilidad digital de 121 países, que representan el 89 % de la población mundial, en colaboración con Disabled People’s International, y de acuerdo con los indicadores de la Unión Internacional de Comunicaciones, así como con los indicadores establecidos en virtud del “llamamiento del decenio a la acción sobre la inclusión digital”, una colaboración entre la Iniciativa Global, Disabled People’s International y la Alianza Internacional de la Discapacidad.

de votación más bajas para los votantes que utilizan sillas de ruedas. Además, la Argentina, Costa Rica, Jamaica y el Perú también apoyaron recientemente la participación política de las personas con discapacidad ampliando el derecho de voto o mejorando la accesibilidad a la hora de votar.

46. Singapur ofrece múltiples vías para el diálogo de los ciudadanos con los funcionarios locales y federales, entre ellas una plataforma de comunicación electrónica que utiliza mensajes cortos de telefonía móvil, el teléfono, el correo electrónico y los medios sociales, una aplicación móvil para el envío de observaciones sobre asuntos municipales, una sección de foro público en un periódico de gran difusión y mecanismos para expresar observaciones en línea en los sitios web de todos los ministerios. Además, durante la pandemia de COVID-19, Sierra Leona organizó un grupo de “movilizadores sociales” de base comunitaria que representaba “todas las categorías de discapacidad” a fin de llegar a las personas con discapacidad y apoyarlas.

47. Para reducir el desempleo, Croacia proporciona rehabilitación profesional a las personas con discapacidad, así como incentivos a las empresas, entre ellos su medida de “ayuda al empleo”, que subvenciona a los empleadores hasta el 75 % del sueldo de los trabajadores con discapacidad. El Afganistán, Austria, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Francia, Ghana, Guyana, Honduras, el Iraq, Kiribati, el Líbano, Nueva Zelandia, Qatar, Singapur, Sri Lanka y el Reino Unido, entre otros, han instituido o han ampliado recientemente programas similares.

## **B. Sistema de las Naciones Unidas**

48. El sistema de las Naciones Unidas ha hecho grandes avances a la hora de asegurar el liderazgo y la participación de las personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones. Ello incluye la participación en el seguimiento y la evaluación de la aplicación de la Convención por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, así como en la elaboración de políticas y programas y en las operaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de otros organismos especializados independientes. El mejor ejemplo de estos avances es la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, presentada por el Secretario General en 2019. La Estrategia consta de una política y de un marco para la rendición de cuentas con dos componentes alineados: un marco para la rendición de cuentas para las entidades y un sistema de calificación de los equipos de las Naciones Unidas en los países referente a la inclusión de la discapacidad. Tanto en marco de rendición de cuentas de las entidades como el sistema de calificación ponen de relieve en su indicador 5 la importancia y la transversalidad de las consultas sistemáticas y la implicación activa de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan. El primer informe del Secretario General sobre la aplicación de la Estrategia demuestra claramente que las entidades de todo el sistema de las Naciones Unidas deben tomar medidas significativas a fin de velar por la consulta sistemática de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.

49. El plan de acción para todo el sistema tiene por fin incorporar la inclusión de la discapacidad en todas las actividades de las Naciones Unidas, de manera externa e interna, lo cual incluye el examen de las actividades actuales y la preparación de otras nuevas. Lo primero implica incluir la discapacidad como principio transversal en la labor de las Naciones Unidas en materia de seguridad, derechos humanos y desarrollo con los Estados Miembros y otros interesados, así como introducir medidas específicas para garantizar que se respeten los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Lo segundo implica elaborar mecanismos para

garantizar que las consultas con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan estén integradas en la formulación y la aplicación de las políticas y los programas, así como iniciativas para contratar a más personas con discapacidad y crear entornos de trabajo más inclusivos y accesibles. Además, para velar por que las consultas con las organizaciones de personas con discapacidad sean significativas y sistemáticas, en 2021 se prepararon y difundieron unas directrices para todo el sistema sobre la consulta a las personas con discapacidad a fin de apoyar la aplicación del indicador 5.

50. En mayo de 2020, el Secretario General publicó un informe de políticas sobre una respuesta inclusiva de la discapacidad ante la COVID-19 en el que exponía las repercusiones de la pandemia en las personas con discapacidad y pedía medidas de respuesta y de recuperación inclusivas de la discapacidad diseñadas y aplicadas en consulta con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan. El informe de políticas presentó ocho recomendaciones a los Estados Miembros, la primera de las cuales contenía llamamientos explícitos a la participación significativa de las personas con discapacidad en todas las etapas de respuesta.

51. El Grupo de Apoyo Interinstitucional para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en tanto que plataforma para todo el sistema de las Naciones Unidas, para abordar la incorporación de la discapacidad en la agenda mundial por medio de sus mecanismos colaborativos para la acción, respondió al efecto devastador de la crisis de la COVID-19 en las personas con discapacidad por medio de una serie de esfuerzos colectivos. Estos incluían actividades conjuntas e individuales para apoyar la participación de las personas con discapacidad en las plataformas intergubernamentales, por ejemplo mediante el apoyo interinstitucional y colaboraciones para promover una respuesta y una recuperación inclusivas de la discapacidad y para reconstruir para mejorar, así como para mejorar la participación de la sociedad civil en los períodos de sesiones 13º y 14º de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrados en noviembre y diciembre de 2020 y en junio de 2021, respectivamente, en los períodos de sesiones de 2020 y 2021 del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible y en el septuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General. Los miembros del Grupo de Apoyo Interinstitucional para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad siguieron colaborando en una amplia serie de informes de políticas para una respuesta y una recuperación inclusivas de la discapacidad haciendo hincapié en la participación y en la capacidad de actuar de las personas con discapacidad en los ámbitos pertinentes de sus mandatos. Estos se centraron en cuestiones clave, como la respuesta humanitaria de emergencia y la protección social inclusiva de la discapacidad, y estaban destinados a reconstruir para mejorar a fin de lograr un mundo más inclusivo de la discapacidad, accesible y sostenible.

52. En el marco de un programa conjunto del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples de la Alianza de las Naciones Unidas para Promover los Derechos de las Personas con Discapacidad para abordar las respuestas inclusivas de la discapacidad a la COVID-19, los miembros del Grupo de Apoyo Interinstitucional para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad colaboran para recopilar y analizar datos y estadísticas pertinentes, elaborar recomendaciones de políticas y compilar buenas prácticas y otra información pertinente a fin de crear de manera conjunta una plataforma común, a saber, un centro de conocimientos para todo el sistema sobre respuestas inclusivas de la discapacidad a la COVID-19. Además, el Grupo de Apoyo Interinstitucional para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad facilitó el intercambio de conocimientos y la colaboración a nivel de todo el sistema y forjó alianzas entre las Naciones Unidas, los Estados Miembros, organizaciones de personas con discapacidad, instituciones

académicas y otros interesados. Entre ellas cabe citar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en 2020 y diversas otras actividades facilitadas por medio del programa conjunto de la Alianza<sup>11</sup>.

53. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos creó un paquete de recursos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Convención a fin de prestar apoyo para las medidas que se emprendan para alcanzar los Objetivos a fin de que estas incluyan a las personas con discapacidad. De manera similar, el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, con el apoyo del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Enviada Especial del Secretario General sobre la Discapacidad y la Accesibilidad, prepararon los Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad.

54. Las oficinas de las Naciones Unidas y sus operaciones en todo el mundo van ampliando las iniciativas para hacer las sociedades más inclusivas y accesibles y adaptándolas a distintos contextos nacionales y sectoriales. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Japón apoyó el acceso a la justicia y la función pública mediante la creación de servicios itinerantes de lengua de señas para las regiones rurales remotas. La Organización Internacional del Trabajo está esforzándose por reducir las barreras a la igualdad de oportunidades en el mundo laboral. En el mundo de hoy, cada día más digitalizado, ello también exige hacer la tecnología de la información y las comunicaciones más accesible, como se refleja en los compromisos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, especialmente el objetivo estratégico 2, relativo a la inclusividad, que figura en su marco estratégico para el período 2020-2023.

55. Mediante las directrices sobre la inclusión de los alumnos con discapacidad en el aprendizaje abierto y a distancia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura proporciona orientación para el aprendizaje abierto y a distancia en consonancia con la Convención. Se espera que, con el tiempo, iniciativas como esta aumenten la capacidad de actuar de las personas con discapacidad y les permitan participar en mayor igualdad de condiciones en todos los procesos de adopción de decisiones.

56. Además, las conferencias y reuniones de las Naciones Unidas son cada vez más accesibles. En su calidad de secretaría de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales apoyó una mayor accesibilidad en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de Asuntos Jurídicos, el Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias y otras oficinas de las Naciones Unidas durante los períodos de sesiones 13º y 14º de la Conferencia, incluida la adopción de un modelo híbrido, con una combinación de sesiones presenciales y virtuales, utilizando plataformas virtuales con nuevas funciones de accesibilidad. Sin embargo, si bien la tecnología digital puede contribuir a ampliar las oportunidades de participación de aquellos con acceso a la conectividad, ello no facilita la inclusión de quienes se encuentran del otro lado de la brecha digital.

<sup>11</sup> Las entidades participantes en la Alianza de las Naciones Unidas para Promover los Derechos de las Personas con Discapacidad son el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la Organización Internacional del Trabajo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres), el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud.

57. La documentación se distribuyó también en formatos accesibles, y todas las reuniones incluían subtítulos e interpretación en lengua de señas internacional. Además, en la actualidad se garantizan los servicios de accesibilidad fundamentales en todas las reuniones oficiales del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, incluido el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible.

58. El sistema de las Naciones Unidas también sigue mejorando la accesibilidad física y los entornos de trabajo. Por ejemplo, la Comisión Económica para África ha aumentado la accesibilidad mediante la creación de un centro especializado. Durante la pandemia de COVID-19, el UNICEF se aseguró de que se incluyeran disposiciones específicas para las modalidades de trabajo flexible para los empleados con discapacidad, que podían estar expuestos a un mayor riesgo de complicaciones, a fin de minimizar su exposición.

### **C. Organizaciones de la sociedad civil**

59. Las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de personas con discapacidad, son un importante elemento propiciador de la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad en los procesos nacionales e internacionales de adopción de decisiones. Como se ha observado anteriormente, el Grupo de Partes Interesadas de las Personas con Discapacidad facilita la inclusión de las personas con discapacidad en los principales procesos intergubernamentales de las Naciones Unidas. Las organizaciones de personas con discapacidad, así como otros interesados, son asociados clave para asegurar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

60. Las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de personas con discapacidad, han hecho hincapié en la importancia de incluir a las personas con discapacidad en el diseño de todas las actividades y productos. Además del diseño de políticas y de programas de desarrollo, ello también incluye el diseño de productos comerciales y de censos estadísticos.

61. Por ejemplo, el programa de la Alianza Internacional de la Discapacidad para hacer de las organizaciones de personas con discapacidad asociados en pie de igualdad en el desarrollo inclusivo en África ha proporcionado a una masa crítica de activistas nacionales con discapacidad en todos los países del continente capacitación para organizar y coordinar la labor de promoción política y desarrollar competencias técnicas para participar de manera eficaz en la labor de promoción de los derechos, con una base empírica, con los Gobiernos y los asociados para el desarrollo a fin de elaborar políticas y programas y de introducir reformas, así como de hacer un seguimiento de los progresos<sup>12</sup>.

## **IV. Conclusiones y recomendaciones**

### **A. Conclusiones**

62. La disponibilidad de datos y estadísticas comparables a nivel mundial sobre la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en todos los

<sup>12</sup> Véase Alianza Internacional de la Discapacidad, “Making DPOs equal partners of inclusive development in Africa”, disponible en [www.internationaldisabilityalliance.org/norad](http://www.internationaldisabilityalliance.org/norad).

ámbitos de la adopción de decisiones, incluida la representación a nivel local y nacional y en los órganos designados de los Gobiernos correspondientes, es limitada.

63. No obstante, los datos de que se dispone muestran los importantes avances que ha hecho la comunidad internacional a la hora de mejorar la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en los procesos nacionales, regionales y mundiales. Varios datos nacionales y regionales ilustran los progresos, y se han aprobado leyes y otras medidas, incluidas modificaciones a la legislación electoral. Estas incluyen la integración de las redes de organizaciones de personas con discapacidad en los mecanismos y procesos nacionales de formulación de políticas, así como la inclusión de las personas con discapacidad en los mecanismos de supervisión independiente. Las pruebas recabadas en todo el mundo de toda la comunidad internacional siguen tendencias similares, dado que los procesos consultivos de las Naciones Unidas, por ejemplo, están más abiertos que nunca a la participación de las personas con discapacidad.

64. No obstante, aún quedan muchos obstáculos. La discriminación, los estereotipos y la estigmatización basados en la discapacidad, los marcos jurídicos desfavorables, y la falta de recursos financieros, apoyo o diálogo por parte de las instituciones públicas y de entidades privadas y de modelos de referencia siguen siendo dificultades persistentes.

65. La participación en la adopción de decisiones y la realización de todos los derechos humanos están interrelacionadas. La falta de acceso a la educación y la capacitación, a la tecnología de la información y las comunicaciones y los servicios básicos, así como los niveles desproporcionados de pobreza, constituyen obstáculos para que las personas con discapacidad puedan participar e implicarse de manera plena y significativa en los procesos y mecanismos de adopción de decisiones. Es, pues, esencial, adoptar un enfoque doble: abordar las cuestiones específicamente relacionadas con la discapacidad, por una parte, e incorporar la discapacidad en todas las iniciativas, programas, proyectos y políticas, por otra.

66. Además, debería incluirse a las personas con discapacidad en todos los aspectos de los procesos y mecanismos consultivos y de adopción de decisiones relacionados con la promoción de una sociedad y un desarrollo inclusivos y accesibles. Deben promoverse la educación y la sensibilización acerca de la necesidad imprescindible de que las personas con discapacidad participen y tengan capacidad de actuar. Además, debe mejorarse la plena representación de la comunidad de las personas con discapacidad en toda su diversidad, en particular en el caso de las personas con una discapacidad psicosocial y de aquellas que se enfrentan a formas múltiples e interseccionales de discriminación, como las mujeres con discapacidad, las personas de edad, las minorías étnicas y religiosas y las personas indígenas.

67. Todavía quedan muchos procesos de adopción de decisiones que siguen careciendo de procedimientos para permitir la participación de las personas con discapacidad y aprovechar sus perspectivas y experiencias. La participación de las personas con discapacidad debería ser un mecanismo integrado para la elaboración de políticas, programas y medidas para la aplicación de la Convención, así como para su seguimiento y evaluación. Además, si bien el sistema de las Naciones Unidas ha hecho progresos en ser más accesible, las plataformas virtuales y el acceso físico a las reuniones mundiales no siempre es accesible para todos, y deben conseguirse procedimientos y financiación para la participación plena e igualitaria de las personas con discapacidad.

68. Hace falta una mayor acción concertada para superar estas dificultades y garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones, en pie de igualdad con las personas sin discapacidad. Ello es

especialmente pertinente a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

69. Velar por la participación plena e igualitaria de las personas con discapacidad y sus organizaciones mejorará el diseño, la aplicación y la inclusividad de las políticas y los proyectos internacionales y nacionales y, en última instancia, redundará en beneficio de la sociedad. En efecto, la mayoría de los avances hacia una mayor inclusión de la discapacidad también han sido beneficiosos para las personas sin discapacidad.

## **B. Recomendaciones**

70. Se alienta a los Estados Miembros a que sigan demostrando su compromiso político adoptando estrategias integrales que aborden las barreras específicas de cada contexto a la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones a todos los niveles de adopción de decisiones, entre otras cosas:

a) Modificando las leyes y normas que impiden a las personas con discapacidad desempeñar un cargo público, y adoptar un marco integral para la igualdad, la no discriminación y la participación en pie de igualdad de las personas con discapacidad, incluso mediante la adopción de medidas especiales de carácter temporal, cuando proceda, a fin de asegurar la participación de las personas con discapacidad. Ello puede incluir revisar la legislación y las cuotas electorales a fin de asegurar la inclusión de personas con discapacidad o de representantes de sus organizaciones en las listas políticas y los mecanismos de adopción de decisiones a nivel local y nacional, y aprobar leyes para hacer los procesos políticos, las instituciones públicas y las entidades privadas accesibles para las personas con discapacidad, en entornos tanto físicos como virtuales;

b) Haciendo que las mesas de votación, la información sobre cómo presentarse a cargos públicos y los edificios públicos sean accesibles para las personas con discapacidad y asegurándose de que existen medios de votación alternativos para acomodar las distintas necesidades de los votantes con discapacidad, así como asegurándose de que los funcionarios electorales tengan capacitación sobre elecciones accesibles y de que los funcionarios de las mesas electorales tengan formación en accesibilidad;

c) Asegurándose de que la información pública sobre las elecciones y los servicios públicos sea accesible para las personas con discapacidad y llegue a los hogares de esas personas. Toda la información pública debe proporcionarse en formatos accesibles, por ejemplo, en braille, formatos de lectura fácil y lengua de señas;

d) Introduciendo un sistema de cuotas para garantizar la representación de las personas con discapacidad en las asambleas legislativas y los órganos de gobierno y aumentando la proporción de personas con discapacidad o de representantes de sus organizaciones en los puestos de designación, también en los niveles ejecutivo y ministerial, en todos los sectores, y creando incentivos para los partidos políticos y las instituciones públicas y privadas para que aumenten el número de candidatos y de dirigentes con discapacidad;

e) Garantizando la participación y consulta efectivas y significativas de las personas con discapacidad, por conducto de las organizaciones que las representan, en la formulación y la ejecución de políticas y programas para la aplicación de la Convención, así como en otras cuestiones a nivel nacional y local, entre otros medios, integrando procesos consultivos como pasos obligatorios en esas políticas y programas;

f) Asegurándose de que se recopilan sistemáticamente datos sobre la participación de las personas con discapacidad y de representantes de sus organizaciones en la adopción de decisiones a todos los niveles, en las entidades públicas y privadas, también para los cargos de designación y los cargos electivos, y de que se comunican datos desglosados por discapacidad sobre los candidatos, la inscripción de votantes y la participación electoral, y mejorando la recopilación de datos, desglosados por discapacidad, sobre los puestos de liderazgo en la administración de justicia, los órganos de aplicación de la ley, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales o industriales, los mecanismos nacionales sobre la discapacidad, las organizaciones comunitarias y el sector privado;

g) Ampliando la disponibilidad y mejorando la asequibilidad de la tecnología de la información y las comunicaciones, entre otros para los alumnos con discapacidad;

h) Asignando la financiación necesaria para apoyar a las organizaciones de personas con discapacidad, por ejemplo mediante programas nacionales, alianzas internacionales y alentando las buenas prácticas entre los donantes y las fundaciones privadas y los organismos de financiación;

i) Facilitando un entorno propicio para las personas con discapacidad en los procesos políticos y de otro tipo, entre otras cosas, mediante campañas de sensibilización y divulgación, alianzas con instituciones de los medios de comunicación, mesas de votación e información accesibles, oficinas públicas accesibles y reconocimiento público del valor y la necesidad de la participación y las contribuciones a la sociedad de las personas con discapacidad;

j) Alentando a los jóvenes con discapacidad, en particular a las mujeres, a considerar carreras políticas y puestos de liderazgo a nivel local, nacional, regional y mundial, entre otras cosas, dando visibilidad a modelos de referencia y facilitando su acceso a programas de mentorías de apoyo e iniciativas dirigidas a las personas con discapacidad que promuevan la participación y el liderazgo;

k) Invirtiendo en instrumentos y programas educativos para apoyar a los aspirantes a puestos de liderazgo, en particular a las mujeres con discapacidad, por ejemplo, fortaleciendo las capacidades de las personas con discapacidad para presentarse a cargos públicos, entre otras cosas, impartiendo formación sobre derechos y sobre las constituciones nacionales;

l) Formalizando mecanismos consultivos específicos para asegurar la participación de las personas con discapacidad en los principales procesos mundiales en todos los pilares de las Naciones Unidas (desarrollo, derechos humanos, y paz y seguridad), y localizando financiación para apoyar a las personas con discapacidad y sus organizaciones en su participación en las conferencias, reuniones y eventos pertinentes de las Naciones Unidas;

m) Preparando e invirtiendo en políticas y programas para asegurarse de que se abordan los requisitos para la participación política, esto es, la reducción de la pobreza, el empleo, la educación y la tecnología de la información y las comunicaciones, y la atención de la salud.

71. Se alienta al sistema de las Naciones Unidas, las instituciones internacionales financieras y de desarrollo y otras organizaciones internacionales y regionales a:

a) Apoyar y complementar los esfuerzos de los Estados Miembros por mejorar los datos sobre la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en la adopción de decisiones estableciendo un mecanismo para

elaborar normas para la recopilación de datos y para hacer un seguimiento de estos en todo el mundo de manera habitual;

b) Aumentar la asistencia a fin de apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos nacionales impartiendo capacitación para ayudar a las personas con discapacidad a participar en los procesos electorales, la actividad política y otras actividades de liderazgo;

c) Aumentar la asistencia a fin de apoyar a los Estados Miembros a mejorar de manera sustancial la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en la adopción de decisiones, por ejemplo, mediante capacitación y el intercambio de experiencias y mejores prácticas;

d) Establecer plataformas habituales para el intercambio de conocimientos y experiencias en la promoción de la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad y el desarrollo;

e) Incluir a las personas con discapacidad en el diseño de las estrategias, los planes y los programas de desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a todos los niveles;

f) Prestar apoyo sostenido y a largo plazo a los asociados nacionales, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, en sus esfuerzos por ser más sensibles a la discapacidad y promover la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en sus procesos de adopción de decisiones;

g) Acelerar los esfuerzos por hacer todas las conferencias y reuniones de las Naciones Unidas y sus procesos accesibles para las personas con discapacidad identificando y eliminando las barreras, tanto físicas como virtuales, e invirtiendo en funciones de accesibilidad, y proporcionar capacitación para las personas con discapacidad y sus organizaciones a fin de que participen en los procesos para las conferencias, las reuniones y los eventos de las Naciones Unidas y otras reuniones de carácter internacional;

h) Seguir aplicando la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad para informar sobre los progresos realizados en su aplicación, también en lo que respecta a las consultas con las personas con discapacidad.

---